

I Jornadas de Sociología de la UNMDP

“A diez años de la reapertura de la carrera de Sociología en Mar del Plata”

Facultad de Humanidades – Universidad Nacional de Mar del Plata

30 y 31 de marzo de 2017

Dra. Daniela Bruno FSOC/UBA y FPyCS/UNLP

Mesa 8. Mutaciones políticas de los movimientos sociales y la acción colectiva.

Título

La vuelta de lxs piqueterxs. Acerca de la Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular.

Resumen

Se caracteriza brevemente el contexto de surgimiento de los movimientos de trabajadorxs desocupadxs a fines del siglo pasado, y en general los modos de vinculación de estas organizaciones y movimientos con el Estado Argentino – en particular durante las gestiones kirchneristas –. Se describen brevemente los antecedentes, el escenario y las razones que llevaron a algunas organizaciones y movimientos populares a la creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El trabajo concluye con algunas caracterizaciones provisorias sobre la actual situación de la CTEP en el contexto del primer año de gestión de gobierno (nacional) de la Alianza Cambiemos, como un actor con una identidad bifronte, que se inscribe estratégicamente como un actor dentro del movimiento sindical argentino y a la vez como parte de los movimientos sociales/populares. Esta presentación se inscribe en la investigación en curso “Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz político ideológica autonomista y nacional popular” (Proyecto UBACYT 20020130200171BA de la Programación Científica 2014-2017 en la Categoría Grupos en Formación) cuyo objetivo es comparar y problematizar los esfuerzos formativos de movimientos populares urbanos de diferente matriz político-ideológica con inscripción territorial en el AMBA para dar cuenta de sus modos diferenciados

de forjar sentidos compartidos que legitimen e inciten a la acción colectiva en un contexto de reconfiguración de las organizaciones del campo popular.

Introducción

En esta ponencia se caracteriza brevemente el contexto de surgimiento de los movimientos de trabajadorxs desocupadxs a fines del siglo pasado y, en general, los modos de vinculación de estas organizaciones y movimientos con el Estado Argentino – en particular durante las gestiones kirchneristas – y se describen brevemente los antecedentes, el escenario y las razones que llevaron a algunas organizaciones y movimientos populares a la creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El trabajo concluye con algunas caracterizaciones provisorias sobre la actual situación de la CTEP en el contexto del primer año de gestión de gobierno (nacional) de la Alianza Cambiemos, como un actor con una identidad bifronte, que se inscribe estratégicamente dentro del movimiento sindical argentino y a la vez como parte de los movimientos sociales/populares.

Esta presentación se inscribe en la investigación en curso “Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz político ideológica autonomista y nacional popular” (Proyecto UBACYT 20020130200171BA de la Programación Científica 2014-2017 en la Categoría Grupos en Formación) cuyo objetivo es comparar y problematizar los esfuerzos formativos de movimientos populares urbanos de diferente matriz político-ideológica con inscripción territorial en el AMBA para dar cuenta de sus modos diferenciados de forjar sentidos compartidos que legitimen e inciten a la acción colectiva en un contexto de reconfiguración de las organizaciones del campo popular.

Las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y la constitución del Movimiento Piquetero

El golpe de estado de 1976 sentó las bases para un cambio en la distribución del poder social en la Argentina: exterminó y disciplinó a los vastos sectores sociales movilizados y a la vez puso en marcha un programa de restructuración económica y social que tendría profundas repercusiones en la estructura social y productiva del país. De ahí en más los sectores populares y parte de la clase media se fragmentaron y perdieron poder, mientras que aumentaba la concentración política y económica en las elites del poder internacionalizado (Bruno, 2016).

El impacto social de estas transformaciones sería visible recién con la llegada de la democracia, a partir de mediados de los años ochenta y durante los años noventa, cuando las redes de supervivencia del empobrecido mundo popular se las tuvieron que ver con las reformas estructurales implementadas durante las gestiones presidenciales de Carlos Menem en el tránsito a la globalización neoliberal.

En ese contexto y con la “adaptación pragmática” de algunos de los grandes sindicatos de la CGT, se fue configurando un nuevo tejido social caracterizado por la expansión de organizaciones populares con una acentuada matriz territorial, y la consolidación de formas de acción colectiva no convencionales e independientes del mundo sindical. Así, las fronteras y los clivajes establecidos en las clases populares estallaron y se multiplicaron, y las organizaciones populares se fragmentaron, segregaron y territorializaron (Bruno, 2016).

En ese escenario, a mediados de los años noventa, las que comenzaron siendo manifestaciones de protesta espaciadas, localizadas y espontáneas, por parte de trabajadorxs del sector público y desocupadxs contra la injusticia de la restructuración neoliberal, se convirtieron a fines de esa década en una nueva forma de protesta y movilización. Lxs desocupadxs adquirieron una visibilidad como no la habían tenido antes y dieron lugar a un abanico de nuevas organizaciones que, en poco tiempo, conformaron el heterogéneo universo de las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs, también conocidas como organizaciones piqueteras.

A pesar de la indiscutible heterogeneidad de las comisiones barriales que, sin vínculos entre sí, se habían ido desarrollando en el conurbano bonaerense con el objetivo de agrupar a lxs trabajadorxs desocupadxs, los repertorios de acción comunes – la asamblea y el piquete fundamentalmente – junto con la rápida respuesta estatal – los planes sociales – fueron los factores que más favorecieron la constitución en la escena política nacional de un “movimiento piquetero” a inicios de este siglo.

Lxs “piqueterxs” surgieron en un contexto de empobrecimiento, vulnerabilidad y exclusión social generados por la implementación de una serie de reformas orientadas a la eliminación del déficit fiscal, la desregulación de los mercados y la privatización de las empresas públicas durante el menemismo. Estas reformas estructurales van a generar un “inérito proceso de descolectivización” (Svampa y Pereyra, 2003:14) seguido de un desacople entre beligerancia social y sistema político que descorporatizó la protesta social.

El surgimiento del denominado “movimiento piquetero” no reenvía a un único proceso sino a la convergencia de bases y trayectorias sociales heterogéneas, y debe ser comprendido estableciendo su doble filiación: la de los piquetes y puebladas de las provincias argentinas en la segunda mitad de los años noventa, y la de los asentamientos, marchas y ollas populares iniciados en los años ochenta en la Provincia de Buenos Aires. Este doble origen es lo que explica su riqueza y a la vez “anticipa algo de su fragmentación inevitable” (Svampa y Pereyra, 2003).

A diferencia de la ola de piquetes y puebladas que se desató en las provincias argentinas entre 1996 y 1997 por el proceso de privatización de las empresas del Estado y la descentralización administrativa, las experiencias de las organizaciones de desocupados en Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata, estuvieron ligadas al proceso desindustrializador que deterioró las condiciones de vida de las clases populares y medias bajas desde mediados de los años setenta, y se inscriben en un modelo de acción territorial ligado a la lucha por la propiedad de la tierra y la organización de la subsistencia, cuyos orígenes datan de mediados de los años 80.

Lxs desocupadxs del oeste y el sur bonaerense que hasta mediados de los noventa se habían recluido y organizado en los barrios en su faz más reivindicativa, a mediados de los noventa empiezan a cobrar notoriedad con sus marchas, sus ollas populares y luego, sus cortes de ruta bajo el influjo de los piquetes y puebladas en las provincias argentinas. Algunas de estas organizaciones de trabajadorxs desocupadxs del Gran Buenos Aires tendrán, quince años después, una participación decisiva en la creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) como se verá más adelante.

Según Svampa y Pereyra (2003), Maneiro (2012) y Freytes Frey y Cross (2009) fueron los repertorios de acción comunes – en particular la asamblea como modalidad decisoria y la adopción del corte de ruta como metodología generalizada de lucha – junto con la rápida institucionalización de una respuesta por parte del Estado – los planes sociales y particularmente el Plan Jefas y Jefes de Hogar – los factores que más favorecieron la constitución en la escena política nacional de un movimiento piquetero.

Las políticas sociales desplegadas por el Estado nacional ofrecieron recursos inmediatos para responder a las necesidades más urgentes de lxs desocupadxs y a la vez tuvieron un potencial movilizador que permitió a las organizaciones posicionarse en el escenario político. En efecto, si el objetivo de conseguir “planes sociales” funcionó inicialmente como incentivo

para la participación en la lucha social de muchos desocupadxs, su obtención reforzó a las organizaciones, en la medida en que la incorporación permanente de nuevos miembros les permitió asumir nuevas tareas, extenderse a otros barrios – o incluso a otras regiones –, tejer nuevas articulaciones, todo lo cual implicó un aumento de su capacidad para legitimarse frente a lxs vecinxs, a los miembros de la organización y al propio Estado. A su vez, para lxs desocupadxs, su involucramiento en las actividades comunitarias de los movimientos contribuyó a gestar sentimientos de pertenencia y nuevas vinculaciones. La participación en asambleas e instancias de formación política, por otra parte, les ayudó a resignificar su propia situación, al otorgarle una perspectiva social e histórica, y a afirmar su capacidad de resistir y transformar la realidad que padecían. Todo lo anterior contribuyó a aumentar la capacidad de movilización y, por lo tanto, de presión política para conseguir nuevos planes (Freytes Frey y Cross, 2009)

Este “círculo virtuoso” o proceso de “retroalimentación” alcanzó su mayor expresión con la implementación, en 2002, del programa antes mencionado “Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”.

Si bien no existen tipos puros ni taxonomías únicas a partir de las cuales se puedan distinguir los agrupamientos, acordamos con Svampa y Pereyra (2003) en que los clivajes políticos que recorrían el arco piquetero de aquel entonces permitían establecer dos alineamientos principales: una línea política más “institucionalizada” reunida en torno a las corrientes y centrales sindicales no oficialistas, donde se ubicaban la FTV y la CCC; y un segundo alineamiento agrupado en torno a partidos políticos y grupos autónomos de izquierda.

El vínculo entre Movimientos Populares y Estado a propósito del trabajo

Podría decirse que la lógica de vinculación que se establece entre los movimientos populares y el Estado hasta la llegada del kirchnerismo estuvo signada por una dinámica de movilización y negociación centrada en la ocupación de espacios públicos por los movimientos populares mediante diversas formas de protesta – como “piquetes”, “marchas”, “tomas”, “ollas populares” – en las cuales la demanda aglutinante fue la del derecho al “trabajo digno y genuino”. Frente a esta demanda la respuesta del Estado Nacional fue, en lo fundamental, la creación de programas de transferencia directa de ingresos que implicaron contraprestaciones obligatorias de los beneficiarios (Gusmerotti, 2010, 2013a, 2013b). En este

contexto, “el trabajo” paulatinamente se tornó un espacio de articulación de prácticas y relaciones políticas alrededor del cual comienzan a ser reconocidas las organizaciones y movimientos populares, como interlocutorxs y administradorxs legítimos de los recursos públicos obtenidos en la movilización y negociación con funcionarixs gubernamentales (Gusmerotti, 2010, 2013a, 2013b).

Con la asunción de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación (en el año 2003) se verifica un cambio sustantivo en la lógica de vinculación entre los movimientos populares y el Estado. Generalizando podría decirse que, con matices y particularidades, se produce la paulatina integración de las organizaciones piqueteras de las corrientes afines a la tradición nacional-popular a la estructura estatal, y la oposición y movilización de las vertientes ligadas a la izquierda partidaria e “independiente”. Durante la gestión de Néstor Kirchner se recortó y dirigió discrecionalmente la entrega de recursos que luego del 2001 había crecido considerablemente, se buscó el fortalecimiento y la integración de buena parte de las organizaciones piqueteras de matriz nacional-popular y se cuestionó la represión abierta como respuesta a la movilización social agudizada tras la masacre del Puente Pueyrredón.

En esa coyuntura diversos movimientos populares definen durante el año 2004 su alianza política con el “kirchnerismo”²²⁹. Las primeras manifestaciones de este posicionamiento político, se expresan en la incorporación de algunos de sus dirigentes como funcionarios de ámbitos institucionales existentes o bien participando de la gestión de espacios creados “ad-hoc” dentro del Estado. Paulatinamente estos movimientos desarrollan una dinámica electoral y se integraron a espacios parlamentarios y políticos, en el marco de la llamada “transversalidad” lo que va configurando una dinámica de movilización caracterizada por acciones colectivas en las que se pretende expresar una adhesión al proyecto político “kirchnerista” y a determinadas iniciativas y políticas estatales (Gusmerotti, 2010 y 2013a, 2013b).

²²⁹ El 15 de diciembre de 2004 Miguel Bonasso (PRD), Luis D’Elia (FTV), Eduardo Luis Duhalde (Memoria y Movimiento), Jorge Cevallos (Barrios de Pie), Edgardo Depetri (Frente Transversal), Francisco Gutiérrez (Polo Social), Emilio Pérsico (MTD Evita), Carlos Girotti (MVP), Jorge Peryra (Partido Comunista CE), Lito Rossi (POR Posadista), Mary Sánchez (Movimiento Social y Solidario), Rodolfo Casals (Corriente Social Bonaerense), Eduardo Jozami (Partido Participación Popular), Gastón Arizpe (Movimiento Octubre) y Marcelo Yaquet (Movimiento 26 de Julio), todos ellos constituidos en el Frente Patria para Todos escriben diez puntos para la unidad de las fuerzas populares y manifiestan su apoyo a Néstor Kirchner <http://argentina.indymedia.org/news/2004/12/246285.php>

A partir de la gestión presidencial de Néstor Kirchner se adoptan una serie de políticas económicas que permitieron incrementar la capacidad de ingresos necesaria para absorber la producción nacional y que generaron un mejoramiento de los índices de ocupación en un contexto de crecimiento económico sostenido²³⁰.

Consecuentemente, la dinámica de la conflictividad popular se trasladó significativamente a las organizaciones sindicales (Antón, 2010), con un ciclo de protestas “ofensivas” vinculadas a la negociación salarial y las condiciones de trabajo, que desplaza a los movimientos de desocupados como uno de los ejes de la movilización social (Etchemendy y Collier, 2008; Palomino, 2004).

Sin embargo, pese al crecimiento económico y a la creación de empleo, importantes segmentos de la población económicamente activa persistieron en condiciones de informalidad laboral y vulnerabilidad social. Durante el kirchnerismo, estos sectores serán objeto de políticas estatales con foco en el desarrollo del trabajo auto-gestionado como veremos seguidamente. Este proceso se profundiza especialmente durante las dos administraciones de Cristina Fernández Kirchner entre fines de 2007 y fines de 2015. Estas experiencias de gestión colectiva representan un modo de organización y politización de los movimientos sociales donde se construyen prácticas laborales e incipientes procesos de construcción de demanda en torno de las condiciones en que se realiza el trabajo asociativo en el contexto de la economía social, que van configurando discursos y dinámicas organizacionales que hacen eje en la precarización e informalidad laboral. Gradualmente se formulan nuevos reclamos al Estado y se retoman acciones de protesta donde se resignifican una vez más en términos de derechos un conjunto de reivindicaciones (Gusmerotti 2010, 2013a, 2013b).

Las políticas sociales del kirchnerismo.

La retórica oficial kirchnerista opuso al discurso neoliberal de las políticas sociales asistenciales sustentado en la noción de carencia (Danani y Hintze, 2010; Grassi, 2012; Hopp,

²³⁰ Nos referimos al establecimiento de un tipo de cambio competitivo que permitió reactivar y fortalecer el mercado interno y generar y fortalecer el empleo local, la recuperación de los espacios de negociación salarial a través de la firma anual de convenios colectivos de trabajo, la movilidad del salario mínimo vital y móvil, y la movilidad jubilatoria, entre otras.

2011 y 2012) la idea del trabajo como “ordenador y organizador social” y como mecanismo de “inclusión” para los sectores populares.

En el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se desarrollaron una serie de políticas que trasladaron el eje de la “contención” hacia la promoción mediante el desarrollo de políticas activas de empleo. En el año 2006 se implementó el Seguro de Capacitación y Empleo como transferencia de ingreso con la intención de licuar los Planes Jefes y Jefas de Hogar (Larsen e Hindi, 2013). A ello podemos sumar los programas de infraestructura social del Ministerio de Planificación Federal como el “Plan Federal de Emergencia Habitacional” y otros programas (“Agua más Trabajo”, “Obra Pública Municipal”, “Centros Integradores Comunitarios”) orientados a la conformación de cooperativas de trabajo, destinados a la obra pública local y conformadas con beneficiarios de planes sociales y desocupados que no contaban con ningún beneficio. Para agilizar la creación de estas cooperativas, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), ente que regula al sector cooperativo y mutual en nuestro país, dictó una resolución que simplificó los trámites para su constitución e impulsó congresos federales de la economía social, en los cuales se concluyó que era necesario desarrollar herramientas jurídicas e institucionales para estabilizar y fortalecer el sector. En esta línea se promulgó la ley del monotributo social y se creó el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y la Economía Social, para pequeños contribuyentes y cooperativas de trabajo. Estos instrumentos legales posibilitaron un crecimiento notable de emprendimientos y cooperativas de trabajo que tuvieron su origen en la política social y los movimientos populares.

En la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Nación (MDS) las políticas sociales del kirchnerismo definieron la economía social como un sector en el que se “fomenta la solidaridad”, el “trabajo colectivo por sobre el trabajo individual” y la “organización popular y comunitaria”, al que debían integrarse las personas en situaciones de vulnerabilidad social y laboral. En este Ministerio se implementaron tres planes nacionales: Plan de Seguridad Alimentaria, Plan Familias, y Plan de Desarrollo Local y Economía Social “manos a la obra”.

Este último se concentró en la promoción del sector de la economía social (ES), de proyectos productivos personales, familiares o asociativos y el fortalecimiento de organizaciones públicas y privadas (Hintze, 2007). Este programa marca la orientación del MDS hacia políticas orientadas al trabajo con el objetivo de “incluir” a los sectores más vulnerables de la población. Es en el marco de las políticas de ES, más precisamente en el

contexto del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social, en agosto del 2009, que se lanza el Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” (PAT).

En un contexto de crisis política y desaceleración del crecimiento económico, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia la implementación del PAT, programa que se orienta a grupos familiares cuyos adultos no cuenten con una pensión, una jubilación, un programa social nacional o provincial incompatible y que no desarrollen una actividad económica registrada. Si los anteriores planes suponían un ingreso menor a 50 dólares mensuales – en el contexto de la licuación pos devaluatorio – en este caso el monto ascendía a poco menos de 300 dólares. El PAT definió al “empleo” como fuente nodal de la inclusión social y a las “cooperativas” como la modalidad de organización local. La forma de ejecución suponía la conformación de “cooperativas” de por lo menos 60 personas, inicialmente en la Provincia de Buenos Aires, que trabajaran en distintos proyectos (en general realización de obras públicas, principalmente mejoramiento de infraestructura de los barrios más vulnerables) establecidos por los entes ejecutores (gobiernos municipales o provinciales) con el aval del MDS. A pesar de las importantes dificultades durante su implementación, la masividad de este programa, la apuesta al trabajo comunitario y el significativo aumento del monto retribuido hicieron que este programa se convirtiera en una actividad relevante para la sustentabilidad de las barriadas y organizaciones populares.

Según datos censales, en el decenio comprendido entre 1991 y 2000 las cooperativas de trabajo eran 1.327. Entre los años 2001 al 2006 el número de cooperativas de trabajo había ascendido a 6.938. Desde la implementación del PAT, se estima que esa cifra aumentó con la creación de 6.623 nuevas cooperativas y 150.000 socios localizados fundamentalmente en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires (Gusmerotti, 2013a).

Si bien fueron muchas las críticas a los programas orientados a fortalecer el empleo, ya sea por las condiciones de precarización del trabajo o por los resabios de focalización en su diseño, es incuestionable la centralidad que tuvo el trabajo como organizador de la vida social en las políticas implementadas a partir del año 2003. Otro rasgo destacable constatable tanto en las políticas de Desarrollo Local y Empleo, en el Ministerio de Trabajo como en el de Desarrollo Social fue la cogestión de políticas públicas entre algunas áreas programáticas y algunas organizaciones sociales, lo cual habilitó a que ciertas organizaciones pudieran incorporar sus visiones políticas y desarrollos territoriales en programas oficiales (Larsen e Hindi, 2013).

Desde esta perspectiva el ciclo que comienza con el gobierno de Néstor Kirchner representa un punto de inflexión respecto de la orientación neoliberal de las políticas socio-laborales previas, en la medida que supuso la articulación de un arco de solidaridades diferentes y la disponibilidad de nuevos recursos para la organización política.

Los gobiernos kirchneristas abrieron un campo de oportunidades para la construcción y fortalecimiento colectivo popular con el reconocimiento de actores sociales que habían participado de los procesos de resistencia social al neoliberalismo, como así también a partir de la recuperación efectiva de viejos derechos laborales y la creación de nuevos derechos para grupos anteriormente desprotegidos como los trabajadorxs rurales o lxs trabajadorxs domésticxs.

La Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular

Cuando Néstor Kirchner asume formalmente el poder ejecutivo, convoca a dirigentes de diferentes movimientos de desocupados a la Casa Rosada. En esos encuentros preliminares se alcanzan acuerdos clave: la no represión de la protesta social, un incremento en el acceso a recursos públicos y el compromiso de los movimientos de intervenir más directamente en la gestión de las políticas sociales. En ese contexto, durante el año 2004 un conjunto de organizaciones/movimientos que habían asistido a la convocatoria de Néstor Kirchner se agrupan primero en el Frente de Organizaciones Populares y en el Frente Patria para Todos después²³¹. En esos espacios se elaboran documentos en los que se declara públicamente el apoyo a las iniciativas del gobierno nacional en torno a la política de derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia, las alianzas internacionales y la deuda externa. Posteriormente varios de estos agrupamientos políticos se fusionan en una única organización en el año 2005: el “Movimiento Evita” (Gusmerotti, 2013a, 2013b)

Ese mismo año (2005) el dirigente nacional del ME, Emilio Pérsico, asume en el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires como vice-jefe de gabinete. Durante su gestión hasta el año 2007, una de las líneas de acción institucional consiste en ampliar la participación de los movimientos populares en ámbitos de la gestión provincial, incorporando militantes y activistas en diferentes organismos públicos, y por otro lado, generar y consolidar las

²³¹ Ver la nota al pie nro. 1

experiencias de “autogestión” y “producción” de los movimientos populares en el territorio provincial (Gusmerotti, 2010).

Poco después, entre septiembre y octubre de 2009, el dirigente nacional del ME, asumió brevemente la Subsecretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, y desde allí se lanzó el “Programa de Inversión Social” (PRIS), antecedente a menor escala del PAT. El PRIS fue creado en 2009 con el objetivo de conformar Cooperativas de Trabajo para la realización de pequeña obra pública municipal. Durante ese año el PRIS constituyó 852 Cooperativas de Trabajo en 56 municipios del Interior de la Provincia de Buenos Aires y el Conurbano, generando 15.000 puestos de trabajo (según informes de gestión del PRIS). Durante el 2010 el MDS implementa efectivamente en el conurbano bonaerense el Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST-Argentina Trabaja) tomando como base las Cooperativas creadas por el PRIS. A fines del 2010 el PRIS se implementaba en 21 municipios, sumando un total de 171 Cooperativas y 3500 puestos de trabajo (<http://www.movimiento-evita.org.ar>).

La crisis internacional coincidente con la primera gestión de CFK “mostró los límites del desarrollismo con derrame inducido” y la imposibilidad de alcanzar el pleno empleo en las sociedades pos-industriales. El ME comienza entonces una etapa de reacomodamiento al interior del espacio kirchnerista y de acercamiento a la Confederación General del Trabajo (CGT). Según los dirigentes del Evita el objetivo de mediano plazo fue la igualación de derechos entre los trabajadorxs que posibilitara la reorganización de la clase obrera, fragmentada por el neoliberalismo al desdibujar el rol del trabajo como organizador del vínculo social. Bajo la premisa de que el trabajo dignifica y el salario es el principal ordenador familiar, se fue fortaleciendo un creciente vínculo con la CGT, “que nunca fue pensada como oposición o competencia, sino como complementaria”, una relación estratégica donde “cada una debía apuntalar a un sector diferente, aunque bregando por el mismo objetivo: la reunificación de la clase trabajadora”. Más aún y en palabras de algunos de sus dirigentes la CTEP es o pretende serlo, “la CGT de los Excluidos”²³².

²³² Los textuales citados en este párrafo fueron extraídos de un documento aportado a la Directora del proyecto UBACYT por la Emilce MOLER dirigente del Movimiento Evita y Directora del PEPTIS/CITRA/UMET.

El miércoles 17 de agosto de 2011, en el salón de actos del recuperado Hospital Israelita en CABA se produjo la fundación de la CTEP²³³. Juan Grabois por los cartoneros del Movimiento de Trabajadorxs Excluidos (MTE), Gustavo Vera por la cooperativa textil La Alameda, Luis Caro por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadorxs (MNER) y Emilio Pérsico por las cooperativas del ME²³⁴, fueron quienes desde el escenario dirigieron la fundación de la CTEP donde confluyeron delegadxs, trabajadorxs y militantes de las distintas organizaciones sociales, quienes votaron a mano alzada por unanimidad la declaración que dejó fundada la Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular en el marco del movimiento obrero organizado. En esa oportunidad se acordó que la primera movilización en conjunto fuera para el 20 de diciembre hasta la sede de la CGT para solicitar ser admitidos dentro de su estructura orgánica (Declaración del Hospital Israelita disponible en <http://www.cartoneando.org.ar>).

Un alto dirigente del ME comenta el diagnóstico que fundamentó la creación de la CTEP y cuál fue desde la perspectiva de su organización la proyección política de la CTEP:

Necesitábamos, construir herramientas comunes, que permitan fortalecer las reivindicaciones de este sector del trabajo, (...) se necesitaba tener una organización gremial si se quiere que permita resolver las reivindicaciones de todo este sector, y donde ya no existe el patrón, sino es el estado, son las grandes empresas y las corporaciones las que, están vinculadas a nuestras experiencias de trabajo, (...) Nosotros decimos, hay alrededor de 4 a 5 millones de trabajadorxs en estas condiciones ¿no? Si vos organizás eso como un sindicato, estás construyendo ahí una cosa monstruosa ¿no?

En una entrevista con un dirigente del MTE, éste rememora el proceso de surgimiento de la CTEP y la incidencia de su organización de la siguiente manera:

En realidad, el MTE tiene el objetivo de la creación de la CTEP desde su nacimiento. De hecho, nosotros no planteamos un movimiento de los cartoneros, por ahí, nos fuimos

²³³ En la literatura académica y de la CTEP sobre su fundación encontramos versiones que establecen esta fecha y otras que plantean que la fundación de la CTEP fue el 1ero. De mayo o el 20 de diciembre de este año. En otros documentos se habla de su fundación en un evento realizado en el Teatro Verdi de La Boca el 1 de mayo de ese año.

²³⁴ Algunas crónicas periodísticas señalan que al momento de su fundación, también integraba la CTEP la Federación de Trabajadorxs de Cooperativas de Infraestructura Social (FeTraCoI).

un poco de mambo, en cuanto al tamaño del objetivo, pero la idea siempre fue un movimiento de trabajadores excluidos” (...) “Existe (*la idea de la CTEP*) desde antes. Lo nuevo es pensar que eso no iba a salir del MTE. La necesidad de juntarse con otros que estuvieron haciendo algo parecido o trabajando sobre el sector de la línea política más general, o del alineamiento, pero la necesidad de la unidad, está en el ADN de cada lucha díganos.

La conformación de un frente tan heterogéneo en lo que a matrices político-ideológicas refiere solo se explica por el carácter fundamentalmente reivindicativo que se ha puesto como horizonte político la restitución de los derechos de los trabajadorxs sin reconocimiento, sin capital y sin patrón.

La CTEP se presenta públicamente como una organización gremial que nuclea a múltiples organizaciones, cuyo principal objetivo es representar a los trabajadores de la economía popular “para la restitución de los derechos laborales y sociales que nos arrebató el neoliberalismo y que aún no hemos recuperado” (<http://ctepargentina.org/>).

Para la CTEP el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos, el aumento de la productividad, el desarrollo de la tecnología y el incremento en las inversiones que se registraron durante el kirchnerismo “no se traduce en trabajo formal y dignidad para todos nuestros compañeros”, y las políticas sociales “abordan el problema estructural de la exclusión socio-laboral con asistencialismo encubierto y recetas de flexibilización progresista, la nueva cara de las “teorías del derrame” que esperan que a la larga el crecimiento del PBI nos resuelva la vida a todos”. Frente a este panorama la CTEP vislumbra dos opciones: “conformarnos con subsistir como “ciudadanos de segunda” magramente asistidos por el estado en las periferias del mercado o construir una nueva economía que rompa con la lógica de la ganancia, la Economía Popular” (<http://ctepargentina.org/>).

Durante las entrevistas, todos los referentes coinciden en asociar las condiciones de posibilidad del surgimiento de la CTEP con proceso de cooperativización que promovió de hecho el gobierno kirchnerista.

Luego de un acampe realizado frente al MTESS a inicios de diciembre de 2015 que resultó en represión y un herido, según relatan varias crónicas periodísticas, la CTEP logró su personería jurídica. En los días previos a la finalización de su gestión como Ministro de Trabajo, Carlos Tomada aprobó la personería social de la CTEP bajo el número de resolución

1727/15. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) creó un régimen de agremiación para lxs Trabajadorxs de la Economía Popular que finalmente les reconoce derecho a sindicalizarse.

En marzo de 2016, ya con Triaca como Ministro de Trabajo de la gestión de la Alianza Cambiemos, se introdujeron modificaciones a la resolución que, no obstante, no fueron sustantivas.

Según datos aportados por la organización, la CTEP hoy actúa fundamentalmente en los tres cordones del conurbano bonaerense aunque cuenta con representación nacional, e involucra orgánicamente a 12.000 trabajadorxs.

Un actor con identidad bifronte

La asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación el 10 de diciembre de 2015, generó condiciones objetivas para una confluencia de espacios con la consecuente transformación del movimiento sindical donde, si bien las franjas de mayor jerarquía aún no han tenido manifestaciones claras sobre una efectiva unidad, “por abajo” viene generándose un fenómeno que tiene como objetivo la necesidad de enfrentar los planes del gobierno nacional.

Hasta inicios de 2016 la CTEP era una organización relativamente desconocida para la opinión pública y sobran los dedos de una mano para contabilizar los trabajos académicos interesados en esta experiencia. Aunque la CTEP tuvo una participación destacada en el acto que las centrales sindicales convocaron a propósito del día del/la trabajador/a, la marcha celebrada el domingo 7 de agosto desde la Iglesia de San Cayetano en el barrio de Liniers a la Plaza de Mayo (convocada por la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie, con el apoyo de las CTA) fue el hito que proyectó en la escena pública nacional la agenda prioritaria de quienes se presentaban como las primeras víctimas del ajuste macrista.

La gestión presidencial de Mauricio Macri y sus decisiones en materia de política económica, provocaron durante el 2016 un incremento del conflicto sindical que la CTEP aprovechó para desplegar su capacidad de movilización, establecer alianzas (con la CCC, Barrios de Pie y las centrales sindicales) y colocar en la agenda de estas últimas los reclamos de lxs trabajadorxs informales, de la economía popular o como los caracterizó el integrante del triunvirato que conduce actualmente la CGT, Juan Carlos Schmid “los descamisadxs del siglo veintiuno” comparándolos con lxs obrerxs del primer peronismo, a quienes “había que

integrar a la economía formal”. Schmid caracterizó a este sector como “los que han caído en la primera volteada, los que han perdido la changa temporaria producto de este ajuste que se ha llevado a cabo” y evaluó su movilización como “un llamado de atención” para quienes integran el sector formal, y “un desafío para la CGT y para cualquier expresión sindical” (Tomado de <http://www.telam.com.ar/notas/201609/163481-cgt-schmid-organizaciones-sociales.html>)

En septiembre de ese año, en diálogo con Radio Nacional, Schmid comentó que la caracterización de lxs trabajadorxs de la economía popular como lxs descamisadxs del Siglo XXI la había tomado del encuentro que días atrás había mantenido en la sede de la CGT con los referentes de la CTEP, Barrios de Pie y la CCC donde acordaron "universalizar la agenda" de reclamos de los trabajadores formales y los informales.

Esta coyuntura reconfiguró la correlación de fuerzas en las negociaciones con el gobierno nacional, y tuvo su correlato dentro del movimiento sindical y también hacia el interior de la CTEP.

El 18 de noviembre bajo la consigna “Unidos por la justicia social” la CTEP junto a CGT y CTA, y Barrios de Pie entre otras organizaciones, marcharon a la Plaza Dos Congresos para reclamar la sanción inmediata de la Ley de Emergencia Social y Laboral. La Ley de Emergencia Social y Laboral declara la emergencia social por el término de un año, instruye al poder Ejecutivo a crear un millón de nuevos puestos de trabajo bajo el régimen del Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo, y establece la creación de un salario social complementario para alcanzar el mínimo, vital y móvil para todos los trabajadores de la economía popular. También garantiza el refuerzo de un 15% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo. Según estimaciones de los organizadores fueron 200.000 las personas que participaron de esa movilización. Juan Carlos Schmid, miembro del triunvirato que conduce la CGT, manifestó en el acto:

Estamos forjando esa herramienta común entre el sindicalismo organizado y los movimientos sociales y populares de este país. Acá a la derecha están los sindicatos confederados, los hombres y mujeres, que tienen un convenio colectivo, que cobran el aguinaldo, que le pagan horas extras, que tienen la seguridad social, y acá a la izquierda están los millones de compatriotas que todos los días se levantan sin saber que van a poner en la mesa al final del día. Es un universo heterogéneo de cooperativas, de cartoneros, de productores pequeños, de campesinos, de organizaciones rurales, de los

que se la rebuscan como pueden para tener un lugar abajo de un sistema que les niega su existencia. (Tomado de <http://ctepargentina.org/200-mil-trabajadores-reclamaron-la-sancion-la-emergencia-social-laboral/>)

El miércoles 23 de noviembre el Senado de la Nación votó por amplia mayoría la ley que posteriormente sería aprobada en la Cámara de Diputados. El mismo día en que se aprobaba en Diputados, en el marco del segundo encuentro de la mesa de diálogo creada por el Gobierno Nacional para dar respuesta a las organizaciones y movimientos sociales, la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley se reunió con representantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita y Barrios de Pie con la presencia de representantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Al cierre de la reunión y según comunicó la CTEP en su fanpage “con un inmenso esfuerzo, organización y lucha, los trabajadores de la economía popular y sus organizaciones, junto al movimiento obrero organizado” habían logrado una “importantísima conquista en el marco de un año tan malo para los humildes”

Los diversos alineamientos políticos y la heterogeneidad de reivindicaciones de una clase trabajadora altamente estratificada son desde la perspectiva de algunos dirigentes de la CTEP los principales desafíos que hoy enfrenta el movimiento sindical de cara a la unidad de la clase trabajadora. Los interrogantes que nos planteamos respecto del devenir de la CTEP en el corto y mediano plazo se vinculan en lo fundamental con la capacidad de la CTEP de “lidar” con esta diversidad de matrices político ideológicas que contiene – en un año como el 2017 que estará atravesado por el clima electoral de las legislativas – por un lado, y con la importante heterogeneidad de agendas reivindicativas de las centrales sindicales y los trabajadorxs de la economía popular, a quienes lxs dirigentes gremiales y el periodismo político siguen refiriendo como “los movimientos sociales” o sencillamente “piqueteros”.

Referencias bibliográficas

ANTÓN, G. *et al.* (2010). "Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en Argentina". *Observatorio Social de América Latina*, 28.

BRUNO, D. (2016). “Redefiniciones político, ideológicas e identitarias de las organizaciones populares autónomas. Estudio retrospectivo del discurso del área nacional de formación del FPDS entre 2001 y 2011”. Tesis Doctoral, FSOC.UBA (mimeo).

CROSS, C. y FREYTES FREY, A. (2009). "Políticas sociales como límite y como herramienta: Reflexiones a partir de experiencias de gestión de dirigentes y referentes piqueteros/as en el período 2001-2007". *Revista El Príncipe*, 1.

DANANI, C. y HINTZE, S. (2010). "Reformas y contrarreformas de la protección social: la Seguridad Social en la Argentina en la primera década del Siglo". *Revista Reflexión Política*, 12(24).

ETCHEMENDY, S. y COLLIER R. (2008). "Golpeados pero de pie: resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003/2007)". *Postdata*, 13.

GRASSI, E. (2012). "La política social y el trabajo en la Argentina contemporánea". *Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, 10 (39).

GUSMEROTTI, L. (2010). "Estar adentro. Dispositivos de intervención estatal y modalidades de acción colectiva. Análisis de una experiencia de gestión estatal de organizaciones populares". *Cuestiones de Sociología*, 5-6.

GUSMEROTTI, L. (2013a). "Iniciativas políticas y movilización de demandas en la economía social". Actas de las VII Jornadas de Investigación en Antropología Social.

GUSMEROTTI, L. y VILLAR, L. (2013b). "Trabajo asociativo y construcción de demandas. Cooperativas de trabajo vinculadas al Movimiento Evita y al Frente Popular Darío Santillán en el marco del PRIST". Actas del III Encuentro Internacional Teoría y práctica política en América Latina. Estado, política y transformaciones en América Latina, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata.

HINTZE, S. (2007). *Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas de lo posible*. Buenos Aires: Espacio.

HOPP, M. (2011). "Relación Estado-sociedad civil en las políticas de desarrollo socioproductivo en Argentina contemporánea". *Revista Katalysis*, 14 (1).

HOPP, M. y FREGA, M. (2012). "Trabajo asociativo y políticas sociales en la experiencia de implementación del Programa "Argentina Trabaja". *Revista Debate público*, Nro 2.

LARSEN, M. e HINDI, G. (2013). "Nuevos escenarios de organización de los trabajadorxs, a partir de la implementación del programa Argentina Trabaja: caso CTEP". VII Jornadas Santiago Wallace de Investigación en Antropología Social. Sección de Antropología Social. Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.

MANEIRO, María (2012). De encuentros y desencuentros. Estado, gobiernos y movimientos de trabajadores desocupados. Buenos Aires. Biblos.

PALOMINO, Héctor (2004) “Trabajo y teoría social: Conceptos clásicos y tendencias contemporáneas”. Documento de cátedra.

SVAMPA, M. y PEREYRA, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.